



INFORME COMUNICACIONES NOVIEMBRE 2023



La seguridad y la corrupción se tomaron la agenda pública durante el mes de noviembre. El secuestro del empresario rancagüino Rudy Basualdo desde su fábrica y su liberación sólo después del pago de 40 millones de pesos, marcó un antes y un después en el país en materia de crimen organizado, en tanto que el denominado Caso Audios reveló una trama de oscuras maniobras que involucra a uno de los más renombrados estudios de abogados y a un grupo empresarial vinculado al mundo financiero e inmobiliario, hoy acusados de posibles delitos de soborno, cohecho, falsificación de documentos y lavado de activos.

“Nos encontramos ante una criminalidad compleja, que requiere una estrategia ad hoc para poder enfrentarla”, señaló el Fiscal Nacional Ángel Valencia, al anunciar el inicio del Proyecto Homicidios, una fuerza de trabajo para enfrentar el crimen organizado. La decisión de la Fiscalía Nacional salía al encuentro de la preocupación de los chilenos, que en noviembre señalaron al narcotráfico y delincuencia como su principal preocupación (45%), seguida por la economía, salud y corrupción (20%), y ante el aumento explosivo de homicidios, sicariato, extorsión, y la presencia de las bandas internacionales más peligrosas del mundo, como el Tren de Aragua, Jalisco Nueva Generación, El Golfo, Los Pulpos, entre otras. En tanto, el gobierno y la oposición se enfrentaron públicamente por las medidas para enfrentar el tema (petición de declaración de estado de emergencia para la RM y otras regiones, expulsión de extranjeros involucrados en delitos graves o medidas para el control de fronteras).

La divulgación por Ciper de un audio grabado durante una reunión sostenida por el abogado Luis Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos y su cliente Daniel Sauer, socio de Factop y Financiera SFT, donde se planea la necesidad de reunir una “caja” para sobornar a funcionarios del SII y se hace alusión a información interna del servicio que revela diligencias investigativas de terceros, abrió una caja de pandora, que hasta fines de mes había significado la salida del jefe de Grandes Contribuyentes y de cuatro funcionarios del SII, además de la petición de renuncia a la asesora de Asuntos Corporativos de la CMF, y la determinación de la Fiscalía Oriente de formalizar como imputados a los protagonistas del escándalo, mientras el SII se querellaba por la presentación de facturas falsas por \$13.000 millones.

La última encuesta de CADEM en noviembre mostró que sólo el 22% de los chilenos ve con optimismo el futuro del país, el nivel más bajo desde que comenzó la medición en 2015, mientras que CEP arrojó que cerca del 90% de los consultados cree que el país está estancado o en decadencia. Esta percepción se fundamenta principalmente en la economía y en la baja proyección de crecimiento e inversión que se espera para 2024. Según la Corporación de Bienes de Capital, energía anticipa una caída del 68%, industria, un 38%, tecnología, un 81%. A eso se agrega una baja de producción de cobre del 80%, una disminución de los permisos de construcción del 18% y un aumento en los empleos informales a 2.407.112. El dato más preocupante fue la decisión de S&P de bajar la clasificación de “estable” a “negativa” para Chile, al señalar como una de las causas “el debilitamiento del consenso político” en el país.

La decisión de la Corte Suprema de rechazar la petición de aplazamiento de la entrada en vigencia del fallo GES, que anuló el reajuste de la prima que hizo la industria en octubre pasado, colocó al sistema de isapres en una situación crítica. En declaración pública, la Asociación de Isapres señaló que “de no mediar acciones concretas desde la autoridad, el sistema de salud privado se pone en cuenta regresiva y en la antesala de una crisis sanitaria y a una situación de inviabilidad por el deterioro terminal de los indicadores financieros de cada institución para operar”, y solicitó a las autoridades y Congreso que busquen una fórmula para evitar la quiebra del sistema asegurador, que arrastraría también a proveedores, como clínicas, centros de salud privados, laboratorios y otros, y provocaría una fuga hacia el sistema público, que ya tiene listas de espera para atención y cirugías de hasta dos años.

Con el inicio de la campaña televisiva para el plebiscito del 17 de diciembre, el proceso constituyente entró en una fase final, caracterizada por una fuerte polarización. La última encuesta de Plaza Pública señaló que el 46% se mostraba a favor del “en contra”, mientras el 38% se declaraba partidario del “a favor”, con un 16% de indecisos.